



Procuración General de la Nación

Suprema Corte :

- I -

VIA BARILOCHE S.R.L.. quien denuncia domicilio en la Provincia de Río Negro e invoca ser permisionaria de un servicio público de transporte automotor de pasajeros interprovincial e internacional, promueve la presente demanda, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la PROVINCIA DE MISIONES, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley local Nº 929, por la que dicho Estado se adhirió al Convenio Multilateral de Salta celebrado el 18 de agosto de 1977, como así también, de los arts. 125, 127, 129, 131, 132, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Fiscal de la Provincia y de las Resoluciones de la Dirección Provincial de Rentas dictadas en consecuencia.

Cuestiona la validez de las citadas disposiciones en cuanto autorizan a gravar con el impuesto a los ingresos brutos local a la actividad del transporte público interjurisdiccional de pasajeros que la empresa desarrolla entre la Capital Federal y la Provincia de Misiones, lo cual debe estar regulado exclusivamente por la Nación, por lo que violan -a su entender- los arts. 4, 9 a 12, 31, 75 inc.13 y 126 de la Constitución Nacional y el art. 39 de la Ley nacional Nº 12.346. Afirma también que dichas normas colisionan con la Ley Nacional de Coparticipación Federal de Impuestos Nº

20.221 y su modificatoria -ley Nº 22.006-, en tanto constituye un supuesto de doble imposición tributaria.

Señala que se encuentra imposibilitada de afrontar el gasto que significa el pago de dicho tributo, toda vez que no está incluido dentro de la tarifa oficial vigente fijada por la Subsecretaría de Transportes de la Nación, quien no contempló la incidencia del referido impuesto provincial, que debe ser soportado exclusivamente por las permisionarias.

Manifiesta, asimismo, que la Dirección de Rentas de la Provincia de Misiones intenta exigirle el pago del citado gravamen, para lo cual procedió a notificarle los actos administrativos dictados en los expedientes Nº 823/98, 700/99 y 1148/00, en los cuales, mediante Resoluciones Nº 394/00 y Nº 1316/00, se resolvió rechazar los recursos planteados por la empresa y aplicarle multas por la falta de pago.

Habida cuenta de lo expuesto, solicita que se decrete una medida cautelar, de conformidad con los arts.195 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que dicho organismo se abstenga de continuar el trámite de los citados procesos hasta tanto la Corte se expida sobre la cuestión de fondo planteada en autos.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs.93.



Procuración General de la Nación

- II -

A mi modo de ver, la cuestión sometida a conocimiento del Tribunal en el sub-lite guarda sustancial analogía con la que fuera objeto de tratamiento por este Ministerio Público en el dictamen emitido el 26 de mayo de 1999, in re E. 115. XXXIV. Originario "El Condor Empresa de Transportes S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa".

Por ello, en virtud de lo expuesto en dicha oportunidad, que doy aquí por reproducido brevitatis causae, opino que la presente demanda corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires 13 de febrero de 2001.-

NICOLAS EDUARDO BECERRA.-

ES COPIA.-

7-12-2000.

DR. ANGEL JOSÉ STAGNARO
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN